

UNA NOTA SOBRE LA ACCION COLECTIVA Y LOS PROBLEMAS ECOLOGICOS

Jordi Roca

Bajo el título «Ecología y proyectos de izquierda», Félix Ovejero critica en esta misma revista el cada vez más generalizado consenso sobre la capacidad del mercado económico y —para utilizar su analogía, que, sin embargo, puede llevar a confusión— del «mercado» político para solucionar los problemas que hoy la izquierda se plantea —y, en particular, los ecológicos—. La crítica es, sin duda, pertinente y oportuna, y, para contribuir al debate, los párrafos que siguen son algunas de las reflexiones que la lectura del artículo me ha sugerido.¹

Está, ciertamente, en la naturaleza de las cosas que las empresas mercantiles no tengan en absoluto en cuenta en sus decisiones el impacto de éstas sobre el ambiente cuando, como pasa generalmente, dicho impacto no influye en su cuenta de resultados. Ello ha sido abundantemente reconocido por la economía ortodoxa con la introducción del concepto «externalidades». Aunque los problemas ecológicos ligados a las decisiones económicas han sido casi siempre considerados excepciones —que se ha creído, a veces, que podrían solucionarse con negociaciones mercantiles si hubiera derechos de propiedad bien definidos sobre el ambiente— y no realidades que impreg-

nan todo el sistema económico y que, además, representan serias amenazas a la propia continuidad de la vida humana.

El poder político puede poner límites al impacto ambiental de las decisiones privadas de las empresas —prohibiendo determinadas actividades— o condicionar algunas de estas decisiones —gravando fiscalmente, por ejemplo, la generación de residuos— a través de medidas legislativas que intentan alterar los resultados del mercado, pero la empresa particular no tiene ningún incentivo para considerar el impacto ambiental como una variable a tener en cuenta en sí misma; es más, si una empresa la tuviese en cuenta «altruísticamente» tendería a perder posiciones en la lucha competitiva.

En analogía al mercado —o, más exactamente, a la imagen idealizada del mercado según la cual sólo se produce un flujo unidireccional desde las demandas (solventes) hacia las empresas sin que las propias empresas dediquen recursos a generar y alterar las necesidades— podría pensarse que el «mercado político» es una institución que básicamente responde a las demandas de los votantes y que, dado que no puede esperarse —al menos de forma permanente y generalizada— un comportamiento altruista de los votantes, que en realidad se des-

¹ Tales reflexiones no deben leerse, en absoluto, como una réplica al artículo de Ovejero (que, probablemente, comparte la mayoría de los argumentos que siguen, aunque quizás con diferentes matices) sino co-

mo un «intercambio» de ideas respecto a una problemática que, en ello coincidimos totalmente, no puede saldarse con recetas fáciles y respecto a la cual la tradición de izquierdas ha sido en general ciega o ingenua.

preocupan de los habitantes de otros lugares (dado el carácter no mundial de este «mercado») y de las generaciones futuras, sólo una solución autoritaria podría potencialmente atender a los urgentes problemas ecológicos.²

El pesimismo respecto a las posibilidades de que la acción política sea capaz de poner freno a procesos de destrucción irreversibles es justificado, pero, sin embargo, la conclusión anterior es apresurada por varios motivos. En primer lugar, la idea de que el «mercado» político es representativo de los intereses de los votantes tal como ellos mismos conciben tales intereses, requiere fuertes matizaciones como, para evidenciarlo a través de un ejemplo reciente y significativo, revela el papel del sistema político y de los medios de comunicación en la reciente guerra del Golfo Pérsico. Entre la inmensa mayoría de partidos políticos y de medios de comunicación, se produjo un práctico consenso en ocultar los auténticos motivos de la opción militar —uno de los cuales, sí fue desvelado por los manifestantes que gritaban «no sangre por petróleo»—, en revestirla de supuestos principios éticos —la democracia, la libertad, los derechos humanos— y en mentir sobre sus auténticas consecuencias (el conocimiento de las cuales resultaría «desmoralizador»). Aunque la posición muy privilegiada —considerada a escala mundial— de la inmensa mayoría de habitantes de los países que protagonizaron la intervención militar, sin duda explica en buena medida el importante apoyo a tal intervención, es importante destacar que, para legitimar la guerra —y, al menos, calmar las malas conciencias— hacía falta precisamente esconder los auténticos beneficios que se esperaban obtener de la guerra, apelar a principios morales y al mismo tiempo, ocultar los hechos que chocaban con la ética de las gentes. El apoyo a la opción bélica por parte de las democracias parlamentarias, no se explicaría, por tanto, como una adaptación a las presiones de los votantes sino como una operación política que re-

quería enfrentarse a la resistencia a la guerra de, como mínimo, un sector muy significativo de las poblaciones.

Respecto al tema aquí discutido, en las democracias parlamentarias la toma en consideración de problemas ecológicos por parte del poder político, generalmente no se da (cuando se produce) como resultado de un esfuerzo para concienciar a los reacios ciudadanos, que sólo se interesan por sus beneficios inmediatos, sino como resultado de la presión de movimientos sociales conscientes de tales problemas y que han de vencer la resistencia del Estado a incorporarlos dentro de sus preocupaciones y su negativa a facilitar información independiente.

Por otro lado, aunque ciertamente es ingenuo pensar en una capacidad ilimitada de sacrificio y altruismo (y, por tanto, debe desecharse cualquier estrategia política que descansa sobre dicho supuesto), cuando se plantean las dificultades de que las acciones individuales se orienten hacia la igualdad y hacia el equilibrio ecológico, aparecen dos tipos muy diferentes de problemas. El primero, el propio de toda acción colectiva, el que —para utilizar el acertado título de un libro reciente del mismo Félix Ovejero— se deriva de la dicotomía *intereses de todos, acciones de cada uno*. El problema es real pero hace falta señalar dos cosas: la primera, que las motivaciones de los individuos son complejas y no necesariamente orientadas por la lógica individualista de obtener (dadas unas preferencias individuales) el máximo beneficio con el mínimo costo; el individuo puede actuar también guiado por solidaridades que le lleven a actuar no en contra de sus intereses sino buscando la satisfacción de dichos intereses a través de la mejora colectiva y que le lleven no a intentar evadir su contribución a los sacrificios que ello comporte, sino a considerar un imperativo ético tal contribución. Sin dicha posibilidad difícilmente puede explicarse la existencia de movimientos sociales (empezando por el movimiento obrero) que, en mayor o menor medida, tienen que solucionar la tensión entre individualismo y acción

² Esta posición, defendida por Wolfgang Harich (*¿Comunismo sin crecimiento?*, Ed. Materiales, Barcelona, 1978) suscitó, ya hace años, debates entre los

sectores (minoritarios) de la izquierda marxista preocupada por los problemas ecológicos.

colectiva a favor de la acción colectiva. La segunda cuestión a señalar es que el establecimiento de normas que obliguen a todos los individuos (sea, por ejemplo, una ley que prohíba la utilización de los clorofluorocarbonos o una huelga apoyada mayoritariamente, cuyo seguimiento es asegurado a través de piquetes y/o del ostracismo social de los esquirols) no es sinónimo de autoritarismo ni de dictadura; al contrario, es perfectamente imaginable que tales normas surjan de un proceso de democracia participativa de la misma forma que puede imaginarse una dictadura igualitaria y austera (aunque obviamente cuanto menos «locales» y más de ámbito planetario sean los problemas ecológicos, más compleja es la cuestión de implantar normas y asegurar su cumplimiento).

Y con ello llegamos al segundo problema, el de cuáles son los intereses que los individuos perciben como propios. Lo mínimo que puede decirse es que la cuestión depende de la cultura dominante y está condicionada por las propias luchas sociales. Aquí sí que no puede apelarse a ningún tipo de racionalidad abstracta porque no tiene por qué ser más racional buscar compulsivamente el consumo que preocuparse por vivir en un entorno agradable o, incluso, que preocuparse por conservar al máximo el patrimonio natural. Es verdad que la realidad empírica hace ser pesimista sobre las posibilidades de que «un ideario iguali-

tario y contrario a una cultura del despilfarrero» calen «en unas poblaciones dispuestas a devastar el planeta antes que bajarse del burro del desarrollo»; sin embargo, las posibilidades de una dictadura ecológica no sólo chocan con la ética de cualquier proyecto político que considere a la libertad como un valor a promover y respetar, sino que también son igualmente remotas: la experiencia de los países del Este, por ejemplo, difícilmente pueden hacer albergar esperanzas sobre el hipotético compromiso de un poder absoluto con cualquier ideario ético: porque, al fin y al cabo, no hay ninguna razón para pensar que la talla ética de una minoría que controla el poder político (o, para poner otro ejemplo, de los intelectuales) haya de ser superior a la de las poblaciones sobre las que ejerce dicho control.

En definitiva, y a pesar de la gravedad de los problemas ecológicos, los proyectos de izquierda sólo pueden tener una perspectiva sólida en la medida en que se transforman los valores y lógicas de actuación de la mayoría de las poblaciones. Con tal perspectiva, el crecimiento de movimientos sociales que se enfrentan a la depredación de la naturaleza, puede tener éxito precisamente en la medida en que el sistema político se democratice más allá de requerir a los ciudadanos que voten periódicamente unas ofertas «prefabricadas».